



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

ÓRGANO OFICIAL

EDICIÓN MENSUAL / AÑO 3 / N° 30 / SETIEMBRE 2011

El Tribunal Constitucional resolvió que no verá más demandas de amparo contra laudos arbitrales, salvo en casos excepcionales y en ese sentido consideró necesario regular los criterios establecidos en su jurisprudencia para dar una visión actualizada de la institución del arbitraje y la fórmula de control constitucional aplicable a éste. Así lo precisó al declarar infundada la demanda de amparo del Expediente N° 00142-2011-PA/TC interpuesta por la Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada María Julia contra un Tribunal Arbitral.

De esta forma, el Colegiado respetará los laudos arbitrales (resoluciones que fija un árbitro entre dos partes en conflicto). Para ello, el TC fijo nuevas reglas que constituyen precedentes vinculantes en materia de amparo arbitral, conforme al artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.

El Supremo Tribunal estableció que los recursos de apelación y de casación para aquellos procesos sujetos a la Ley General de Arbitraje, constituyen vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias para la protección de derechos constitucionales, que determinan la improcedencia del amparo.

Asimismo, determinó que no procede el amparo para la protección de derechos constitucionales, aun cuando éstos constituyan parte del debido proceso o de la tutela procesal efectiva. Además que es improcedente el amparo para cuestionar la falta de convenio arbitral, en tales casos la vía idónea es el recurso de anulación, o el de apelación y anulación si correspondiera la aplicación de lo dispuesto por la referida Ley. Igualmente, contra el resultado por el Poder Judicial en materia de impugnación de laudos arbitrales, sólo podrá interponerse proceso de amparo contra resoluciones judiciales, conforme a las reglas del artículo 4° del Código Procesal Constitucional y su desarrollo jurisprudencial, entre otras reglas.

De otro lado, el Tribunal precisa que solo podrá ejercerse el control difuso sobre una norma aplicable al caso de la que dependa la validez del laudo arbitral, siempre que no sea posible obtener de ella una interpretación conforme a la Constitución y además, se verifique la existencia de un perjuicio claro y directo respecto del derecho de alguna de las partes.

TC NO VERÁ MAS DEMANDAS DE AMPARO CONTRA LAUDOS ARBITRALES SALVO EN CASOS EXCEPCIONALES



Finalmente, el Tribunal ha dispuesto que a partir del día siguiente de la publicación de la presente sentencia en el diario oficial El Peruano, toda demanda que se encuentre en trámite y que no se ajuste al precedente vinculante establecido debe ser declarada improcedente.

Por seguridad jurídica y en vía excepcional, las partes pueden en un plazo no mayor de 60 días hábiles interponer recurso de apelación o anulación, según corresponda, en sede ordinaria.

Procesos de inconstitucionalidad

■ Admitidas

■ Exp. N° 00014-2011-AJ/TC

Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por cinco mil trescientos veintiocho ciudadanos representados por Gloria Chaca Pucante de la Vega, presidente de la Comisión de Orden de la Universidad Nacional de la sede de Satipo y el Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad nacional sede Satipo contra la Ley N° 29616, artículos 2.5 a) Segunda Disposición Complementaria Transitoria. Mediante esta Ley se crea la Universidad Nacional Interdisciplinaria de la Selva Central Juan Santos Atahualpa con sede en Chanchamayo sobre la base de la Filial Daniel Alcides Carrón.

■ Exp. N° 00015-2011-AJ/TC

Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por cinco mil quinientos cincuenta y tres ciudadanos, representados por Rogelio Efraín Huertas, contra el Decreto Legislativo N° 1026 que estableció un régimen especial facultativo para los Gobiernos Regionales y Locales que deseen implementar procesos de modernización.

TC RECHAZA POSIBILIDAD DE SEGUIR IMPORTANDO VEHÍCULOS USADOS, MOTORES, REPUESTOS Y AUTOPARTES

El Tribunal Constitucional rechazó la pretensión de un grupo de personas naturales y empresas importadoras de autopartes que solicitaban a que se les inaplique el Decreto Supremo N° 0013-2008-MTC, para seguir importando los motores y repuestos automotores, porque a su juicio, es un acto lesivo similar a la que establece el DS N° 017-2005-MTC.

Fue al declarar mala la resolución que concedió la apelación, contenida en el Expediente N° 00863-2011-PA/TC y en consecuencia improcedente los recursos interpuestos por una serie de empresas que no fueron parte del proceso de amparo que declaró fundada la demanda interpuesta por Nippon Auto Parts S.R.L. y otros, e inaplicable al caso de éstos, el artículo 2° del Decreto Supremo N° 017-2005-MTC que establecía la suspensión para quienes no cumplan los requisitos para la importación de motores, partes, piezas y repuestos usados de uso automotor.

Con este proceso de amparo, las empresas demandantes pretendían que se les inaplique el Decreto Supremo N° 0013-2008-MTC, para seguir importando los motores y repuestos automotores, porque a su juicio, es un acto lesivo similar a la que establece el DS N° 017-2005-MTC.

El Tribunal Constitucional reiteró que jurídicamente no puede pronunciarse respecto del referido grupo de empresas y personas naturales que, no habiendo obtenido pronunciamiento favorable en el proceso de amparo contenido en el Expediente N° 01576-2007-PA/TC, también solicitaron, bajo los mismos argumentos, beneficiarse con dicha sentencia.



El Colegiado estableció en su sentencia que tal pedido carece de sustento jurídico, toda vez que como es evidente, no puede hablarse de la existencia de discriminación (trato desigual) entre el elemento subjetivo (identidad de la persona afectada), tal como lo ha exigido el Supremo Tribunal en reiterada jurisprudencia (Sentencia N° 04878-2008-PA/TC, entre otras).

ÍNDICE

Justiciables: Constitucional

Declaran inconstitucionales decretos de urgencia sobre medidas facilitadoras para el trámite o ejecución de proyectos de inversión

PÁGINA 3

Justiciables: Constitucional

El Estado tiene el deber de proteger y defender el derecho a la salud mental porque es parte integrante del derecho a la salud

PÁGINA 4

Justiciables:

El amparo arbitral y el control constitucional

PÁGINA 2

CEC:

Presidente del TC Carlos Mesa clausuró taller del CEC con fiscales en Piura

PÁGINA 6

Programa Tuz Derechos:

Pueblos indígenas no se oponen al desarrollo sino a las malas acciones tomadas contra ellos

PÁGINA 7

Noticias Constitucionales:

En los meses de setiembre al TC realizó en Lima audiencias públicas de Pleno y Salas dejando al voto 426 procesos

PÁGINA 8



Carlos Mesía



El amparo arbitral y el control constitucional

Dada la importancia del arbitraje dentro del orden constitucional, era indispensable que el Tribunal Constitucional considerara pertinente proceder a una regulación de los criterios establecidos en su jurisprudencia, a fin de tener una visión más clara y actual de lo que hoy representa para nosotros como Supremo Interpretador de la Constitución, la institución del arbitraje y el control constitucional sobre este mecanismo.

Con este objeto fue necesario establecer nuevas reglas con carácter de precedentes vinculantes, en armonía con el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, con el propósito de establecer con claridad y precisión los criterios en materia de amparo arbitral, estas reglas, entre otras son:

El amparo es la vía excepcional. El procedimiento ordinario para la protección de los derechos fundamentales violados por el "laudo" es el recurso de anulación previsto en el Decreto Legislativo N° 1071.

Del mismo modo, no es posible ir en amparo para cuestionar la ausencia de convenio arbitral. En tales casos, la vía idónea es el recurso de anulación de apelación y anulación si fuera de aplicación de lo dispuesto por la Ley N° 26572.

Es importante señalar que la interposición del amparo con desconocimiento de las nuevas reglas de procedencia establecidas, no suspende ni interrumpe los plazos previstos para demandar en proceso ordinario el cuestionamiento del laudo arbitral vía recurso de anulación y/o apelación, según corresponda.

No obstante, debemos precisar que, respecto de lo resuelto por el Poder Judicial en materia de impugnación de laudos arbitrales sólo podrá interponerse proceso de amparo contra resoluciones judiciales, conforme a las reglas del artículo 4° del Código Procesal Constitucional y su desarrollo jurisprudencial.

De otro lado, el Tribunal reconoce el ejercicio del control difuso de constitucionalidad en la jurisdicción arbitral el cual es objeto de modulación por el Tribunal Constitucional, con el propósito de que cumpla debidamente su finalidad de garantizar la primacía de la Constitución y evitar cualquier desviación en el uso de este control.

Por ello se instituye como regla que el control difuso en la jurisdicción arbitral se rige por las disposiciones del Código Procesal Constitucional. Sólo podrá ejercerse sobre una norma aplicable al caso de la que dependa la validez del laudo arbitral, siempre que no sea posible obtener de ella una interpretación conforme a la Constitución y además, se verifique la existencia de un perjuicio claro y directo respecto del derecho de alguna de las partes.

Tribunal Constitucional resolvió que es competencia de la ONPE regular la franja electoral

El Tribunal Constitucional resolvió que corresponde a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la competencia para regular, dentro del marco constitucional y legal, todos los aspectos relacionados con la implementación de la franja electoral de control electoral, de conformidad con lo previsto por la Constitución, la Ley Orgánica de la ONPE y la Ley de Partidos Políticos. Así lo estableció al declarar fundada en parte, la demanda de conflicto de competencia contenida en el Expediente N° 002-2011-CC/TC interpuesta por la ONPE, contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Además incluye entre otras cuestiones, su distribución entre las organizaciones políticas, determinadas reglas para el uso de la franja electoral, el control preventivo del cumplimiento de tales reglas, el procedimiento y la ejecución de la contratación de los espacios en los medios de comunicación radiales y televisivos. Ello sin perjuicio de las competencias

fiscalizadoras, supervisoras y jurisdiccionales, de que conformidad con la Constitución, corresponden al Jurado Nacional de Elecciones.

Al mismo tiempo, el Tribunal declaró que, conforme a la Constitución es competencia del JNE, fiscalizar y supervisar el ejercicio de la competencia de control externo de la actividad económico-financiera de las organizaciones políticas ejercida por la ONPE, por consiguiente, ésta tiene la obligación constitucional de remitir los informes y documentos que el Jurado Nacional de Elecciones le requiera para el debido ejercicio de tal supervisión.

Finalmente, el Tribunal Constitucional resolvió la nulidad del literal g) del artículo 14° del Reglamento de Fiscalización de la Supervisión del Cumplimiento de las Normas sobre el Financiamiento de las Organizaciones Políticas aprobado mediante Resolución N° 032-2011-JNE que confería al Gerente de Fiscalización de este organismo la función de analizar y sistematizar la

documentación referida a la información financiera representada por cada organización política ante el proyecto del voto informado del JNE, y que dicha información debía ser evaluada de manera conjunta con la información remitida por la ONPE. A través de la aludida información, el JNE ingresaba a controlar directamente el financiamiento de las organizaciones políticas, competencia que la legislación orgánica reserva exclusivamente a la ONPE.



El presidente del TC planteó que el Congreso delimite funciones del JNE y ONPE para evitar más conflictos en tema de educación

El presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía, planteó que el Congreso delimite con claridad las funciones entre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para evitar más conflictos en torno al tema de educación electoral.



"Muchos de los conflictos que se suscitan en el país, por ejemplo de delimitación territorial, problemas como el de Majes SJMA -sobre el uso del agua entre cusqueños y arequipileños-, se debe a que hay vacíos en la legislación", puntualizó.

En ese sentido, recomendó, que para no llegar a un nuevo conflicto judicial, que el Congreso se encargue de delimitar con claridad las funciones de estas instituciones, pues aún no se ha resuelto qué instancia es la que se encarga de la educación electoral, que es un área en la que también han existido diferencias entre ambos entes electorales.

"Pero en el marco de lo que he señalado se trataría de una labor administrativa, más que de justicia electoral, pues es educación al ciudadano sobre cómo votar. Entonces es claro que debería corresponderle a la ONPE", opinó.

El Tribunal Constitucional declaró fundada parcialmente la demanda de competencia planteada por la ONPE contra el JNE bajo el argumento que vulneraba sus atribuciones en asuntos como la franja electoral y la supervisión de fondos partidarios.

Mesía explicó que el principio que guió la sentencia del TC es que el JNE fue concebido por la Constitución como un órgano para impartir justicia electoral, a diferencia de la ONPE que es la instancia administrativa encargada de conducir el proceso.

"Y por tanto es competencia de la ONPE administrar los recursos de la franja electoral, pero como política preventiva, algunos temas de desigualdad, inequidad o injusticia, le corresponderá al Jurado fiscalizar y supervisar como se administra y supervisar la franja, si es de forma equitativa", añadió.

El Perú se ha convertido en una plaza amigable para resolver controversias generadas en otros países mediante el arbitraje en virtud a sentencia del TC



Persona de Árbitros durante su participación en el programa "Tus Derechos" del Tribunal Constitucional.

El Perú se ha convertido en una plaza amigable para resolver controversias generadas en otros países mediante el arbitraje, en virtud del gran precedente que significa la sentencia del Tribunal Constitucional, pues en teoría un arbitraje no debe durar más de seis a diez meses en promedio, afirmó el doctor Juan Luis Avendaño Valdez, miembro de la Asociación

amparo, permitirá exportar resoluciones de arbitraje y mejorar la imagen de nuestro país en el exterior frente a los inversionistas, porque así sabrán que un arbitraje en el Perú dura entre seis a diez meses y se acabó, salvo casos excepcionales que puntualmente precisa este precedente", afirmó el destacado jurista.

Avendaño Valdez explicó que señalar al Perú como plaza, como sede de arbitrajes internacionales en este mundo globalizado permite resolver controversias generadas en otros países. Por ejemplo, la firma de un contrato entre un panameño y un francés es una cosa común y corriente. Cada uno de ellos deseará resolver su controversia en su país de origen, pero al final pueden decidir buscar una plaza amigable que es aquella donde no hay obstáculos ni dificultades y en el Perú sí las había.

Agregó que el arbitraje es costoso en términos relativos porque hay que pagar a una institución que va a organizar el arbitraje salvo que sea ad hoc, en cuyo caso hay que pagarle al secretario además hay que pagarle a los árbitros, que son profesionales del derecho, que van a prestar un servicio jurídico. Entonces en medio de todos estos pagos en comparación con que en el Poder Judicial casi no se paga, salvo las costas, entonces comparando uno con otro teóricamente es mejor al Poder Judicial.

Pero todos sabemos, continuó el jurista, que el Poder Judicial se demora y no se demora porque quiere sino porque hay una sobra carga procesal, hay una litigiosidad muy grande, por esta razón las partes, personas naturales, pero principalmente las empresas suelen recurrir al arbitraje. La gran ventaja del arbitraje en contra del costo es la prontitud y la celeridad.

Síguenos en Facebook y en Twitter
El Tribunal Constitucional ingresa al mundo de las redes sociales, por ello invitamos a la comunidad jurídica y público en general, a unirse a nuestra Red Social en FACEBOOK y TWITTER.
Búscanos en FACEBOOK como Tribunal Constitucional y en el TWITTER como @TC- PERU.
También puedes agragarnos ingresando a la página web del tribunal www.tc.gob.pe y hacer clic en el enlace.



Jurisprudencia constitucional

Declaran inconstitucionales decretos de urgencia sobre medidas facilitadoras para el trámite o ejecución de proyectos de inversión

El Tribunal Constitucional declaró el Tribunal Constitucional los Decretos de Urgencia N° 001-2011 y el N° 002-2011 que conllevan una serie de medidas de facilitación para el trámite y ejecución de determinados proyectos de inversión, en tanto a que no cumplen con el requisito de inmediatez.

El Colegiado señaló que lo regulado en el referido decreto de urgencia crea incertidumbre sobre la transitoriedad de las medidas adoptadas, apreciándose más bien un carácter indefinido, pues dichas disposiciones no son producidos al presente año, lo cual podría dar lugar a nuevos decretos de urgencia fundados en la falta de adjudicación de determinados proyectos de inversión, situación que, por lo demás, no podría presentarse como autónoma e imprevisible para justificar un decreto de urgencia.

Fue al declarar fundada la demanda de inconstitucionalidad con el Expediente

N° 0004-2011-PT/C, interpuesta por el 25% de congresistas de la República contra los citados decretos de urgencia dados con el fin de cambiar las disposiciones antes referidas para ser aplicables durante el año 2011, para facilitar la promoción de la inversión privada en determinados proyectos de inversión, asociaciones públicas privadas y concesión de obras de infraestructura y de servicios entre otras para ser aplicables durante el presente gobierno.

El referido UO estableció medidas de simplificación de exigencias legales y dispuso que a partir de su vigencia, la serie de actos previos requeridos solamente la aprobación del Consejo Directivo de Promoción.

Asimismo, las certificaciones emitidas por, de acuerdo a lo establecido en el Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental



y a la Ley General del Ambiente, serán requeridos por la entidad conponente antes del inicio de la ejecución de los proyectos o actividades de servicios y comercio correspondientes, y si serán requeridos para la obtención de los autos vacantes administrativos de carácter sectorial, otorgados por dichas entidades para el ejercicio de las actividades económicas a partir del cualquier adjudicado.

TC confirmó destitución de dos jueces por liberar indebidamente a sentenciados por tráfico ilícito de drogas

El Tribunal Constitucional confirmó la destitución por parte del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) de los jueces Carlos Alberto González Ortiz de la Corte Superior de Justicia de Huancayo y Mario Páez Taborda del Octavo Juzgado Oral con Jefe en Cárcel de Arequipa, a quienes se les imputa haber incurrido en irregularidades en la liberación de un sustancioso y dos procesados extranjeros por tráfico ilícito de drogas, respectivamente.



con la materia de pronunciamiento. El ex magistrado declaró fundada la reafirmación de penas solicitadas por el denunciante Juan Carlos Salas Llamín, por tráfico ilícito de drogas, permitiendo que salga en libertad.

El otro caso correspondió al Jefe Juan Mauro Páez, quien convalidó liberar, tras visitar el mandato de detención por el de comparecencia a un procesado por tráfico ilícito de drogas,

presentando una aparente motivación para no tener en cuenta que la Sala Penal había advertido del peligro de fuga mismo, toda vez que el procesado no estaba con domicilio en el país por ser extranjero. Lo mismo ocurrió con otro procesado, en las mismas circunstancias con la advertencia de la Sala sobre el peligro de fuga, lo que finalmente ocurrió.

El TC declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por el juez sustancioso, contenida en el Expediente N° 00291-2011-PA/TC, considerando que no se ha vulnerado el derecho constitucional alguno, sino que por el contrario la Comisión la atribución conferida por la Constitución Política del Perú, respondiendo las garantías mínimas, exigidas a todo procedimiento administrativo sancionatorio a reintegrar derechos.

En el primer caso, el Colegiado declaró improcedente la demanda de amparo del Expediente N° 01807-2011-PA/TC interpuesta por el estado en sede de Habeas corpus al CNM, por la destitución de sustancioso en argumentos de orden disciplinario, sobre la base de fundamentos objetivos y coherentes.

Plazo para interponer amparo contra resolución judicial vence a los 30 días

El plazo para interponer un proceso de amparo contra una resolución judicial firme concluye los 30 días hábiles después de la notificación de la resolución que ordena su cumplimiento, resolvió el Tribunal Constitucional, al declarar fundada la demanda interpuesta en el Expediente N° 00467-2010-PA/TC.

El Colegiado precisó que sin entrar al fondo del asunto, desestimó la demanda porque fue interpuesta fuera del plazo establecido en el artículo 44° del Código Procesal Constitucional, pues el Segundo Juzgado de Trabajo de Lima lo notificó a la demandante el 23 de abril del 2007 con el "Cumplase con lo Responderido", en tanto que la demanda de amparo fue promovida recién el 26 de julio del 2007.

A efectos de interpretar correctamente el segundo párrafo del artículo 44° del CPC, señaló también que "cuando el justiciable interpone medidas impugnatorias o recursos que no tengan real posibilidad de reverter sus efectos, el inicio del plazo prescriptorio deberá considerarse desde el día siguiente de la fecha de notificación de la resolución firme a la que se considera lesiva y conlleva inevitablemente 30 días hábiles después de la notificación de la resolución que ordena al cumplimiento con lo decidido, sin que igualmente se acepten excepciones imprevistas contra este régimen prescriptorio (artículo 2005-2009-PA/TC).

TC ratificó prohibición de importación de repuestos y autopartes usados

La decisión de prohibir el ingreso al territorio nacional de motores, repuestos y autopartes de una automotor fue ratificada por el Tribunal Constitucional, tras emitir una nueva sentencia recaída en el Expediente N° 01197-2010-PA/TC (Formosa S.R.L.) después de considerar que no permite la importación de estos repuestos de una automotor.

El Segundo Tribunal declaró fundada la solicitud de repetición de autos lesivos homologados contenida en el Expediente N° 01197-2010-PA/TC, e interpuso por la empresa importadora Formosa S.R.L., alegando que el artículo 1° del D.S. 003-2009-MTC, violaba los efectos de una sentencia estimativa emitida a su favor.

En el presente caso, el Tribunal precisó que no se configuran los elementos objetivos y de nulidad inimpugnabilidad para que la solicitud pueda ser admitida toda vez que, en cuanto se refiere al elemento objetivo, no aparece que existe un elemento normativo (DS N° 003-2009-MTC) que no estaba vigente ante el momento de que se cupido la sentencia.

Esta sentencia se suma a la expedida hace unos días donde el Tribunal Constitucional rechazó la pretensión de un grupo de personas naturales y empresas de importar a regar importando los repuestos, Expediente N° 00863-2011-PA/TC del caso Niponi Auto Park S.R.L., y otros.

Reafirmó que derecho a la libertad sindical está reconocido por la Constitución

Cualquier acto que se oriente a impedir o restringir de manera arbitraria e injustificada la posibilidad de acción o la capacidad de obrar de un sindicato resulta vulneratorio del derecho a la libertad sindical, reafirmó el Tribunal Constitucional.

El derecho a la libertad sindical reconocido por la Constitución, garantiza en su dimensión plural, la personalidad jurídica del Sindicato, así es, la capacidad que tiene una organización sindical para cumplir sus objetivos que a su propia naturaleza le corresponden, como son el desarrollo, la protección y la defensa de los derechos e intereses de sus miembros.

Así lo precisó al declarar fundada la demanda de amparo contenida en el Expediente N° 03304-2009-PA/TC, interpuesta por el Sindicato Nacional Católico de Trabajadores del Seguro Social de Salud (SINACAT) solicitando el cese de la amenaza de violación de sus derechos a la libertad sindical, de negociación colectiva y de huelga, entre otros.

El Tribunal ordenó al Registro Social de Salud que cumpla con reconocer la personería del SINACAT desde la fecha de su inscripción en el Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos, que se abstenga de realizar cualquier acción que impida, obstaculice o limite el ejercicio de sus derechos de negociación colectiva o de huelga, bajo apercibimiento de que el juez de ejecución aplique las medidas coercitivas previstas en el Código Procesal Constitucional, con el abono de los costos del proceso.

En el presente caso, con la Constancia de Inscripción Automática, emitida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, se prueba que el Sindicato demandante se encuentra inscrito en el Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos.



Las resoluciones judiciales deben estar justificadas en datos objetivos

De conformidad con lo señalado por el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 05043-2006-PA/TC, el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del debido proceso y la abstención judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporcione el correspondiente jurídico o los que se derivan del caso.

Así lo precisó al resolver en favor de la resolución en la demanda de amparo contenida en el Expediente N° 00799-2011-PA/TC interpuesta por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima que declaró improcedente la demanda y que fue confirmada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, por considerar que en sede casuaria se estableció que el demandado Banco Hipotecario (en liquidación) no encontraba fundamento para contraria bajo la modalidad de licitación de sus servicios.

En el caso concreto se advierte que la resolución cuestionada expedida por la Sala Suprema, motivó el carácter desvirtuatorio de la demanda laboral cuestionando, en la ampliación al caso, del primer de primera de la nulidad. No obstante, la Sala no expone las fundamentaciones y/o consideraciones que la conculgan a manifestar dicho principio, presionar que resultaría de las obligaciones cumplimentadas.

En ese sentido, el Tribunal ordenó que la Sala Civil admita a trámite la demanda y se pronuncie sobre el fondo del asunto.

Jurisprudencia Constitucional

Precisan ámbito de información que puede solicitarse a empresas de servicios públicos

Las personas jurídicas privadas que brinden servicios públicos o efectúen funciones administrativas, están obligadas a informar sobre las características de los servicios públicos que prestan, sus tarifas y sobre las funciones administrativas que ejercen, bajo concesión, delegación o autorización del Estado, precisó el Tribunal Constitucional.

Esto supone que la información accesible siempre habrá de referirse a alguno de estos aspectos y no a otros, siendo éste el ámbito de información que puede solicitarse a una persona jurídica de derecho privado.

El Supremo Tribunal declaró improcedente la demanda de hábeas data del Expediente N° 02509-2011-PHC/TC, interpuesta por una ciudadana contra la empresa Telefonos del Perú S.A.A., quien invocando la violación de su derecho de acceso a la información pública, interpuso la demanda solicitando que se le entregue copias certificadas de información referente a plazas vacantes, cuadro analítico de personal, presupuestos, entre otras.

El TC señaló que si bien el servicio de telefonía que presta la empresa emplazada se configura como servicio público, sin embargo, la información solicitada por la demandante no se encuentra referida a los tres aspectos a los que se la ha hecho mención.

Si el fiscal ni ninguno de las partes formulan acusación el proceso debe ser sobreseído

La vigencia del principio acusatorio imprime al sistema de enjuiciamiento determinadas características, en el sentido que no puede existir juicio sin acusación, debiendo ésta ser formulada por persona ajena al órgano jurisdiccional sentenciador, de manera que si el fiscal ni ninguno de las partes posibles formulan acusación contra el imputado, el proceso acusatorio debe ser sobreseído necesariamente.

Así lo reafirmó el Tribunal Constitucional al declarar fundada la demanda de hábeas corpus contenida en el expediente N° 01409-2011-PHC/TC formulada por un ciudadano contra la Sexta Sala Penal de los Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima por violación a sus derechos constitucionales. El Tribunal ordenó dejar sin efecto la resolución expedida por la mencionada Sala Penal que anuló el auto de sobreseimiento del proceso segundo contra el demandante.

En el presente caso, el fiscal provincial emitió dictamen señalando que no había mérito para formular denuncia, por lo que el juzgado declaró sobreseída la causa seguida en contra del demandante con la opinión favorable del fiscal superior. No obstante, la Sexta Sala declaró nulo el auto de sobreseimiento y dispuso su ubicación y captura porque no había rendido su declaración instructiva.

El Tribunal subraya que la primera de las características del principio acusatorio guarda directa relación con la atribución del Ministerio Público reconocida en el artículo 159-49 de la Constitución, entre otros, de ejercer la acción penal. Siendo exclusiva la potestad del Ministerio Público de iniciar la acción penal y de acusar, a falta de ésta el proceso debe llegar a su fin.

Conforme lo señalado por el TC, en caso de que el fiscal decida no acusar y dicha resolución sea ratificada por el fiscal superior, en el caso del proceso ordinario, o por el fiscal superior para el caso del proceso sumario, al haberse desistido el titular de la acción penal de formular acusación, el proceso penal debe culminar.

El Estado tiene el deber de promover y defender el derecho a la salud mental porque es parte integrante del derecho a la salud

El derecho a la salud mental es parte integrante del derecho a la salud y el ámbito de su tutela comprende también todos aquellos componentes propios del bienestar psicológico y mental de la persona humana, precisó el Tribunal Constitucional tras declarar fundada en parte la demanda de hábeas corpus contenida en el expediente N° 3425-2010-PHC/TC.

Se trata de una demanda interpuesta por un ciudadano contra la Sala Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, al haberse acreditado la afectación al derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, en conexidad al derecho a la libertad personal del demandante, en el extremo que la Ejecutoria Suprema cuestionada carece de motivación respecto de la temporalidad de la medida de tratamiento ambulatorio impuesta al demandante.

El Tribunal precisó que si bien la temporalidad de la medida no fue fijada por las instancias precedentes, la

Sala Suprema emplazada debió establecer su término, esto es, precisar con proporcionalidad y razonabilidad, la fecha de su culminación a fin de que su imposición resulte válida; sin embargo, ello no termina de invalidar si apreciamos que dicho pronunciamiento, en su conjunto comporta una motivación insuficiente que debe ser subsanada.

En ese sentido, el supremo intérprete de la Constitución puntualizó que, para establecer la periodicidad de la medida de tratamiento ambulatorio estima pertinente precisar los siguientes criterios: En general, toda medida de seguridad de tratamiento ambulatorio impuesta al inculcado debe considerar una determinada periodicidad de las atenciones terapéuticas especializadas y con un tiempo límite de duración del tratamiento. Además toda medida de



seguridad de tratamiento ambulatorio impuesta al inculcado debe contar con una motivación especial que justifique su imposición en suficientes pericias médicas estatales.

La detención judicial preventiva es una medida provisional que limita la libertad física pero no por ello es inconstitucional



Conforme a la reiterada jurisprudencia, el Tribunal Constitucional (TC) afirmó que la detención judicial preventiva es una medida provisional que limita la libertad física, pero no por ello es inconstitucional, en tanto no comporta una medida punitiva que afecte la presunción de inocencia que asiste a todo procesado; tanto más, si legalmente se justifica siempre y cuando existan motivos razonables y proporcionales para su dictado, lo que debe ser apreciado en cada caso concreto.

Así lo reafirmó al declarar infundada la demanda contenida en el Expediente N° 02408-2011-PHC/TC interpuesta por un procesado contra los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Junín, solicitando la nulidad de las resoluciones judiciales a través de las cuales se desvirtuó su pedido de variación del mandato de detención en su contra, alegando la afectación de los derechos a la libertad individual y a la motivación de las resoluciones judiciales.

Tras recordar que el derecho a la libertad personal no es absoluto de conformidad con la Constitución Política, el Tribunal precisó que en efecto, la detención preventiva debe ser una medida provisoria, es decir que su mantenimiento sólo debe persistir en tanto no desaparezcan las razones objetivas que sirvieron para su dictado, pues las medidas coercitivas, además de ser provisionales, significa que su permanencia o modificación a lo largo del proceso, estará siempre subordinada a la estabilidad o cambio de los presupuestos que posibilitaron su adopción inicial.

En ese sentido, resulta válido que la citada medida se mantenga en tanto persistan los presupuestos que dieron lugar a su dictado. Cabe señalar, además, que las resoluciones que se pronuncian respecto al pedido de variación de la medida cautelar de la libertad deben cumplir con la exigencia constitucional de la motivación de las resoluciones judiciales.

Señalan que resulta irrazonable que una persona esté sometida a un estado permanente de investigación policial o fiscal

El Tribunal Constitucional reafirmó que si bien es cierto que toda persona es susceptible de ser investigada, para ello debe existir la concurrencia de una causa probable y la búsqueda de la comisión de un ilícito penal en un plazo que sea razonable. De allí que resulta irrazonable que una persona esté sometida a un estado permanente de investigación policial o fiscal.

Así lo precisó al declarar improcedente la demanda de hábeas corpus N° 02067-2011-PHC/TC interpuesta por un ciudadano contra el fiscal supremo encargado del control interno del Ministerio Público y otros, alegando la violación de sus derechos al debido proceso y al plazo razonable de investigación penal. Sostiene que después de haber sido investigado dos años por la Oficina de Control Interno de Lima por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública y otros, y declararse el archivo de la investigación, se declaró nula la resolución de archivarlo y se reanuda la investigación al no haberse cortado traslado al procurador ad hoc.

Del cuadernillo del Tribunal se advierte que el fiscal superior jefe de la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima, informó a este Colegiado que la investigación contra el demandante, cuya presunta comisión del delito de corrupción de funcionarios en sus modalidades de cohecho pasivo propio y cohecho pasivo específico, se encontraba concluida al haberse emitido el respectivo informe final, disponiéndose su elevación a la Fiscalía de la Nación por lo que carece de objeto emitir pronunciamiento de fondo. Motivo por el cual la demanda fue declarada improcedente al haber cesado la pretendida violación de los derechos involucrados.



Jurisprudencia Constitucional

La vía adecuada para cuestionar una ordenanza con rango de ley es el proceso de inconstitucionalidad

De conformidad con lo dispuesto por el Código Procesal Constitucional, cuando un conflicto trate sobre una competencia o atribución expresada en una norma con rango de ley, la vía adecuada para ventilar la controversia es el proceso de inconstitucionalidad. Fue al declarar improcedente la demanda de conflicto de competencia, contenida en el Expediente N° 0001-2009-PCC/TC.



La demanda fue interpuesta por la Municipalidad Distrital de la Molina contra la Municipalidad de Lima Metropolitana, alegando que ésta última, viene adoptando alianzas con la Municipalidad de la Molina, lo que afecta la Constitución y la Ley Orgánica de

Municipalidades. Se asigna, por lo que solicita se declare sin efecto, nulo o inaplicables en todo su contenido, los alcances de la Ordenanza N° 1169-MML, emitida por la demandada.

El Tribunal señala que conforme se aprecia de la demanda, el conflicto versa sobre una competencia o atribución expresada en una ordenanza municipal, es decir, en una norma con rango de ley y que para estos casos, el Código Procesal Constitucional expresamente dispone, que si el conflicto trata sobre una competencia o atribución expresada en una norma con rango de ley, el Tribunal Constitucional declarará que la vía adecuada para ventilar la controversia es el proceso de inconstitucionalidad.

Por otro lado, según el inciso 5.º del artículo 203 de la Constitución señala que la demanda de inconstitucionalidad contra una ordenanza municipal, le corresponde ser interpuesta al uno por ciento de los ciudadanos del respectivo ámbito territorial por ser éste el titular de tal legitimidad para interponer la demanda.

Derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales garantiza que sentencia se cumpla

El Tribunal Constitucional precisó que el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales garantiza que lo decidido en una sentencia se cumpla y que la parte que obtuvo un pronunciamiento de tutela, a través de la sentencia favorable, sea resuelta en su derecho y compensada, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido.

El Colegiado recordó que en las sentencias N° 0015-2001-AI/TC, 0016-2001-AI/TC, 0004-2002-AI/TC y 0004-2002-AI/TC, dejó establecido que el derecho a la ejecución de resoluciones judiciales no es sino una concreción específica de la exigencia de efectividad que garantiza el derecho a la tutela jurisdiccional, y que no se agota allí, toda vez que, por su propio carácter se refleja en otros derechos constitucionales de orden procesal.

Así lo señaló el Tribunal al declarar fundado el recurso de agravio constitucional, contenido en el Expediente N° 0176-2011-PAT/TC, interpuesto por Adalberto Ramos Llaúca contra la Sala de Beneficios y Seguridad Social del Pescador (CBSPS), solicitando que se le otorgue pensión de jubilación conforme al Reglamento del Fondo de Jubilación del Pescador, con abono de las pensiones devengadas, con intereses legales y costos del proceso.

Al respecto, el TC ordenó a la demandada que cumpla con ejecutar la sentencia conforme a los fundamentos de la presente resolución, es decir, en cumplimiento de lo ordenado en primera y segunda instancia que declaró fundada la demanda ordenándose que se emita la resolución otorgándole al demandante la pensión de jubilación dispuesta en la Resolución Suprema N° 423-72-TR, con abono de los devengados correspondientes e intereses legales desde que se produjo el acto lesivo con el pago de costas y costos del proceso.

En el presente caso, la controversia consistió en determinar si en fase de ejecución de sentencia correspondía que se amplíe el período para liquidar las pensiones devengadas del demandante hasta febrero de 2010, considerando que se han venido devengando pensiones de jubilación por no haber cumplido la demandada con ingresar a la planilla de jubilados, en lugar de establecer una fecha límite a julio de 2008, como considera la Sala.

Precisan requisitos mínimos de procedencia en las demandas de amparo contra amparo

El proceso de amparo contra amparo es un régimen procesal de naturaleza excepcional cuya procedencia se encuentra sujeta a determinados requisitos, precisó el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 4095-2010-PAT/TC que declara inadmisible la demanda interpuesta por la Municipalidad Distrital de Nepeña en Arechavila.

El Tribunal señaló que los requisitos para la procedencia del amparo son, entre otros, cuando la vulneración constitucional resulte evidente o manifiesta. Trátándose de amparo en materia laboral dicha procedencia supone el cumplimiento previo o efectivo de la sentencia emitida en el primer proceso de amparo.

Asimismo, que su habilitación solo opera por una sola y única oportunidad, siempre que las partes proponentes del primer y segundo amparo sean las mismas. Resulta pertinente tanto contra resoluciones judiciales desfavorables como contra las estimatorias, sin perjuicio del recurso de agravio especial habilitado expresamente contra sentencias estimatorias recaídas en procesos constitucionales relacionados con el delito de tráfico ilícito de drogas y/o lavado de activos, en los que se haya producido vulneración del orden constitucional, en particular el artículo 85.º de la Constitución.

Además, que su habilitación se condiciona a la vulneración de uno o más derechos constitucionales, independientemente de la naturaleza de los mismos; procede también en defensa de la doctrina jurisprudencial vinculante establecida por el Tribunal Constitucional; se habilita además, en casos de los terceros que no han participado en el proceso constitucional cuestionado y cuyos derechos han sido vulnerados, así como respecto del recurrente que por razones extraordinarias debidamente acreditadas, no pudo acceder al agravio constitucional.

El municipio solicitaba se declare la nulidad de la resolución, que en su contra emitió la demanda de amparo ordenando la inaplicabilidad de una ordenanza municipal y la reposición de los trabajadores demandantes.

Conflictos o descoordinaciones administrativas no pueden justificar la renuencia en el cumplimiento de resoluciones

Los conflictos o la falta de coordinación entre entidades administrativas no pueden justificar el incumplimiento de resoluciones, que desde la fecha en que se emitieron hasta la actualidad, han transcurrido más de siete años sin que hayan podido ser ejecutadas en sus propios términos, en agravio de un profesor que se puso a haber resultado ganador de un concurso, aún sigue esperando su nombramiento.

Así lo precisó el Tribunal Constitucional al declarar fundada la demanda de cumplimiento contenida en el Expediente N° 05868-2009-PCTC interpuesta por Marino Carhuallangui Lavado contra la Dirección Regional de Junín, solicitando se ejecuten las resoluciones del 30 de diciembre de 2002 y junio del 2003 que dispusieron su nombramiento en la Dirección de la Institución Educativa Integral Estatal "San José". El Tribunal ordenó a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) que, en un plazo máximo de dos días hábiles de notificada la presente sentencia, dé cumplimiento a las resoluciones regionales.

La Dirección demandada alega que la responsable en cumplir las referidas resoluciones, es la UGEL de Jaén, no obstante, ello no justifica que desde el momento en que se emitieron hasta la fecha, no han podido ser ejecutadas, es decir que se está frente a una situación de renuencia, pues no obstante el tiempo transcurrido, no se ha efectuado acción alguna que intente o trate de revertirla.

Que si bien es cierto la UGEL es el órgano responsable de ejecutar las resoluciones mencionadas, ello no le impedia ni le prohibía a la Dirección de Educación demandada, para que desde la fecha en que fueron emitidas proceda a verificar y controlar el cabal y oportuno cumplimiento del mandato contenido en ellas, pues estructuralmente la unidad referida es un órgano subordinado a la Dirección de Educación.



Demanda de amparo debe estar basada en hechos ciertos, no imaginarios y de inminente realización

Para la procedencia del amparo para casos de amenaza de vulneración de derechos constitucionales, es importante señalar que esta amenaza debe presentar dos rasgos esenciales: certeza e inminencia, reafirmó el Tribunal Constitucional, precisando que dicho riesgo puede ser atendido a través del proceso constitucional de amparo.

Así lo señaló en la sentencia recaída en el Expediente N° 01292-2011-PAT/TC que declaró inadmisible la demanda de amparo interpuesta por un ciudadano contra el alcalde de la Municipalidad de Trujillo en defensa de su derecho a la libertad de empresa con el objeto de que se declare inaplicable el reglamento de servicio de transporte especial de personas para la provincia de Trujillo, aprobado mediante Ordenanza Municipal.

Tas recordando la Sentencia N° 0091-2004-PAT/TC, expresamente su fundamento 8.º, se afirmó que para el objeto de protección frente a una amenaza a través de los procesos constitucionales, ésta debe ser cierta y de inminente realización; es decir, el perjuicio debe ser real,

efectivo, tangible, concreto e ineludible, excluyendo del amparo los perjuicios imaginarios o aquellos que escapen a una captación objetiva.

En consecuencia, para que sea considerada cierta, la amenaza debe estar fundada en hechos reales y no imaginarios, y ser de inminente realización, esto es, que el perjuicio ocurra en un futuro inmediato, y no estar basado en hechos verdaderos, efectivo, lo cual implica que equivocadamente menoscabó alguno de los derechos tutelados tangible, esto es, que debe peribirse de manera precisa; e ineludible, entendiendo que implicará irremediablemente una vulneración concreta.

En el presente caso, el Tribunal considera que la "amenaza" que sustentaría la pretensión del demandante, no cumple con tales requisitos, en la medida que no puede ser calificada como cierta e inminente. No es cierto porque el demandante argumenta como sustento para sostener la existencia de una amenaza, especulaciones subjetivas; además, del expediente no se observa la existencia de actos materiales que sugiera indudablemente la posibilidad de una amenaza, en el sentido de que la demandada no ha cometido ningún acto que interfiera en la esfera de sus intereses y derechos.



Centro de Estudios Constitucionales

Diplomado en Trujillo

El viernes 23 de setiembre el CEC inició el Diploma de Especialización en Justicia Constitucional, en la ciudad de Trujillo dirigido a jueces, fiscales, profesores universitarios y profesionales del derecho en general. El tema es "Teoría y fundamentos en torno a la defensa de la Constitución".

El evento académico que se realizó en coordinación con el Colegio de Abogados de La Libertad continuó el sábado 24 con la participación del doctor Luis Sáenz Dávalos, asesor jurisdiccional del TC. Ese día hubo dos jornadas, una con el tema "El derecho procesal constitucional y la jurisdicción constitucional" y otra con el tema "Jurisdicción constitucional en el Perú y magistratura constitucional. La autonomía procesal del TC".

El diplomado está estructurado en tres módulos: "Dogmática procesal constitucional", "Procesos constitucionales" e "Interpretación de los derechos fundamentales" los mismos que comprenden un total de treinta sesiones académicas haciendo un total de 120 horas lectivas y concluye el 9 de diciembre.

Curso de especialización

En el marco de sus actividades académicas, el CEC realizó del 7 al 30 de setiembre el Curso de Especialización "Derechos fundamentales, proceso penal y control constitucional" en su sede de la calle Los Cedros 209 en San Isidro. El programa académico estuvo dirigido a jueces, fiscales, docentes universitarios y profesionales del derecho en general.

Los temas que se abordaron en el curso fueron: "Jurisdicción penal ordinaria y jurisdicción constitucional: Alcances y límites del control constitucional de las resoluciones judiciales en el proceso penal", "Aspectos materiales y procesales del hábeas corpus", "Hábeas corpus contra resoluciones judiciales", "El principio de legalidad penal y de *ne bis in idem* en la jurisprudencia del TC", entre otros.

El curso de especialización tuvo como expositores a los doctores Arsenio Oré Guardia, César Azabache Caraculito, Camilo Suárez López de Castilla, José René Pesqueira, Vanessa Tassara Zevallos, Alberto Che Piu Carpio y Carlos Caro Coria.

En Lima también se dictó taller para fiscales

Con el tema "Derechos fundamentales, proceso penal y control constitucional", se desarrolló del 28 al 30 de setiembre el taller que organizó el CEC y la Escuela del Ministerio Público, en Lima. De acuerdo con el programa los expositores fueron el magistrado Ricardo Beaumont Calligros y los asesores jurisdiccionales del TC Edgar Carpio Marcos, Javier Adrián Corpura y Camilo Suárez López de Castilla.

El taller estuvo dirigido a fiscales en lo penal y su metodología fueron las exposiciones y talleres de estudio de casos. Su objetivo fue el análisis de los alcances del contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales en el ámbito del proceso penal, desde la perspectiva de la jurisprudencia del TC.



Informativo Mensual

DIRECTOR GENERAL
Carlos Mesia
Presidente del Tribunal Constitucional

EDITOR:
Gregorio Mattos
REDACCIÓN:
Carlos Rojas y Mariela Franco

Presidente del TC Carlos Mesia clausuró taller del CEC con fiscales en Piura

El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Carlos Mesia, clausuró el taller descentralizado que organizó el Centro de Estudios Constitucionales del TC y la Escuela del Ministerio Público los días 7, 8 y 9 de setiembre en la ciudad de Piura, en el marco de las actividades académicas que se han programado en varios departamentos.

El titular del TC participó en el evento académico con la exposición "Hábeas corpus contra resoluciones judiciales", la misma que fue escuchada por un nutrido auditorio conformationado por fiscales en lo penal.

De acuerdo con el programa, el taller que se realizó en el auditorio del Ministerio Público de Piura se inició el miércoles 7 con la exposición del doctor Javier Alvarado con el tema "El principio constitucional de *ne bis in idem* en la jurisprudencia del TC"; el jueves 8 el doctor Jesús Silva expuso sobre "Tiempo y razonabilidad en el proceso penal".

El evento denominado "Derechos fundamentales, proceso penal y control constitucional" buscó analizar los alcances del contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales en el ámbito del proceso penal, desde la perspectiva de la jurisprudencia del TC.

Mesia informó que para el mes de octubre se han programado tres talleres descentralizados en Huancayo, Cuzco y Cajamarca.

Huesped ilustre

Durante su estadía en esta ciudad, la alcaldesa provincial de Piura, Ruby Rodríguez declaró huesped ilustre al doctor Carlos Mesia en una breve ceremonia que se realizó en los ambientes de la Municipalidad.



Presidente de Junta de Fiscales Superiores de Piura consideró que precedentes del TC son una herramienta eficaz para aplicar el derecho

Los precedentes vinculantes emitidos por el Tribunal Constitucional son una fuente de conocimiento y una herramienta eficaz para una mejor interpretación y aplicación del derecho, afirmó el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Piura, doctor Guillermo Castañeda Otsu.



Estos precedentes tal como lo establece el artículo 7° del Código Procesal Constitucional", indicó tras agradecer la participación en el taller del presidente del Tribunal Constitucional Carlos Mesia.

Castañeda Otsu destacó la labor que cumple el TC que se ve plasmada en los precedentes vinculantes que son una fuente de conocimiento para que los fiscales y demás operadores jurídicos puedan aplicar e interpretar mucho mejor el derecho.

El presidente de la junta de fiscales de Piura dijo que para poder aplicar mejor el derecho debemos capacitarnos y en esa línea se debe felicitar a la Escuela del Ministerio Público y al Tribunal Constitucional por estos talleres que se vienen realizando en diversos departamentos del país.

Luego de destacar el taller descentralizado que realizó el Ministerio Público con el Centro de Estudios Constitucionales del 7 al 9 de setiembre en Piura, el fiscal superior señaló además que dichos precedentes contribuyen a la existencia de mayor predictibilidad en las decisiones de los jueces y fiscales.

"Todos los operadores jurídicos tenemos la obligación, por imperativo de la norma de dar cumplimiento las disposiciones contenidas en

CEC realizó taller descentralizado en el Cusco

El Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional realizó el 21 y 22 de setiembre un taller de capacitación descentralizado en el Cusco, dirigido a jueces y fiscales en el marco de sus actividades académicas.

El encargado de clausurar el evento fue el director del CEC, magistrado Gerardo Eto Cruz, quien tuvo a su cargo la exposición "Amparo contra resoluciones judiciales".

Según lo programado, el taller se inició el miércoles 21 de setiembre en el auditorio de la Corte Superior de Justicia del Cusco con la participación del doctor Edgar Carpio Marcos, asesor jurisdiccional del TC, quien expuso sobre "Proporcionalidad".

Eto Cruz explicó que el taller de capacitación del CEC fue diseñado con el propósito de orientar al análisis de la incidencia de los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional en la práctica jurisdiccional.



Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú
N.º 2009-05639
Colaborador: Giancarlo Cresci
Diagramación: Christian Guerra
Año 3 N.º 30, setiembre 2011 - Tiraje: 10,000 ejemplares

Programa Tus Derechos

Pueblos indígenas no se oponen al desarrollo sino a las malas acciones tomadas contra ellos

Los pueblos indígenas no están en contra del desarrollo sino en contra de las malas acciones que se han desarrollado hasta ahora, pues el desarrollo económico de los inversionistas mata la vida frente al desarrollo armónico de los pueblos indígenas, afirmó Alberto Pizango Chota, presidente de la Asociación Intertribal de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDSEP). Estas declaraciones las formuló durante su participación en el programa "Tus Derechos" del Tribunal Constitucional.

Dijo que quieren el verdadero desarrollo armónico, pero esto implica un respeto a los pueblos indígenas y no que prime el crecimiento económico frente a la vida de los seres humanos. El dirigente tras señalar que la Ley de la Consulta Previa es un gran avance después de casi 16 años de inaplicabilidad del Convenio 169 de la OIT por parte del Estado peruano, agregó que esta ley es perfectible y que la organización que representa está dispuesta a apoyar para elaborar la reglamentación.

"Siempre a los pueblos indígenas se nos han considerado como los obstaculizadores del desarrollo. Hay dos visiones para entender el desarrollo: una propuesta de desarrollo económico que se plantea desde la sociedad empresarial y otra visión de desarrollo armónico que plantean los pueblos indígenas, originarios del país, específicamente de los Andes y de la Amazonia", sostuvo.



Pizango manifestó que los pueblos indígenas no están con ningún movimiento extremista y que el tema de la consulta previa se ha satanizado pues los pueblos indígenas están en situación en el legítimo derecho a ejercer la defensa de los derechos humanos.

El líder amazónico indicó que se ha tergiversado el verdadero diálogo a partir del Convenio 169, a su no aplicabilidad, entonces ahí se han ido minimizando y violando cada día los derechos de los peruanos.

ENTREVISTAS

Dra. Alicia Abanto, Representante de la Defensoría del Pueblo
El derecho a la consulta es importante porque debe establecer el diálogo como un valor y una práctica, pero además debe institucionalizarse. Agregó que también será importante que derechos como el de la propiedad sean respetados por las autoridades así como los procesos de toma de decisión. Explicó que la consulta es un derecho de los pueblos indígenas y consiste en que antes de que el Estado tome una decisión, pueda convocar a los pueblos indígenas para que se establezca un proceso de diálogo. (34/09/11)

Dra. Jaime de la Puente, asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional
La sentencia del TC que declara a las personas con VIH/SIDA como sujetos de especial protección constitucional aprueba el reconocimiento de un estado especial, por el cual el Estado les debe otorgar una mayor protección. Indicó que la última sentencia en materia previsional, el Estado a través de la ONP declaró caduca la pensión de una persona que padecía VIH porque entendió que la incapacidad había producido una mejora en su estado de salud que al final determinó la extincción de la pensión. (17/09/11)

Dra. Miguel Guej, secretario adjunto de la Coordinadora de DD. HH.
Se debe reconocer que existen prácticas discriminatorias y en esa línea es necesario que el Estado y las instituciones puedan dotar de normas para que esa discriminación no avance, sino que retroceda. Afirmó que existe discriminación por el tema racial, contra las mujeres, contra los indígenas, por el lenguaje y que hoy en día existe la discriminación acumulada que es una forma de discriminación que se da por ser mujer, por ser indígena, por hablar una lengua quechua o aymara y por ser pobre. (10/09/11)

Dra. Edgar Cargio, asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional
El derecho a la igualdad persigue el remover aquellos obstáculos que impiden el ejercicio de los derechos fundamentales en igualdad de oportunidades dado que se trata de un grupo de la población que siempre ha sido excluido durante años. Explicó que el TC ha diferenciado la discriminación y el trato diferenciado y eso a partir del derecho a la igualdad, derecho que no garantiza que seamos tratados siempre igual, es decir se debe tratar igual a lo que es igual y desigual a lo que es desigual. (10/09/11)

Paul Martín, representante de UNICEF
Es necesario que el gobierno incremente la inversión social para los servicios sociales de tal manera que en el futuro no se tenga que esperar a que haya crecimiento económico para recién invertir más en educación o en salud. El funcionario explicó que los países que han hecho grandes saltos en términos económicos son precisamente los países que han decidido priorizar la inversión social. Agregó que Perú está acercándose a los países más ricos de la región pero sigue con indicadores así de debajo del promedio. (03/09/11)

Dra. Carla Puerto, asesora de Adhes Infantes SOS Perú
Más allá de promover una adecuada educación para los niños y garantizar su derecho a la salud, promueve el derecho a una familia así como el derecho a un cuidado de calidad. "La Convención de los Derechos del Niño ya lo menciona, la familia es el ambiente protector por excelencia para un niño". Resaltó que Adhes Infantes SOS Perú es una organización internacional que trabaja en 132 países hace más de 64 años y que en el Perú brinda un programa de desarrollo orientado al niño. (03/09/11)

Oráculo jurídico

1. ¿Que ha dicho el Tribunal Constitucional respecto de la figura del abuso del derecho en relación con los procesos constitucionales?

El artículo 107 de la Constitución proscribiera el abuso del derecho, en general, y de los procesos constitucionales, en particular. Y es que el abuso de los procesos constitucionales no sólo constituye un grave daño al orden objetivo constitucional, sino también a la tutela de los derechos fundamentales de los demás ciudadanos. Esto es así, por cuanto al hacerse un uso abusivo de los procesos constitucionales, de un lado, se restringe prima facie la posibilidad de que este Colegiado pueda resolver las causas de quiebras legítimamente acudidas a este tipo de procesos a fin de que se tutela prontamente sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, y de otro lado, constituye un gasto innecesario para el propio Estado que tiene que premiar de recursos humanos y logísticos para resolver tales asuntos. En concreto, con este tipo de pretensiones, lo único que se consigue es dilatar la atención oportuna de las auténticas demandas de justicia constitucional y a la vez frustrar la administración de justicia en general. (STC 57-04-2008-PA/TC, Fundamento 15).

2. ¿Es posible reconvertir un proceso constitucional en otro?

Cuando una demanda ha sido mal planteada y corresponde disponer la nulidad de los actos y el reencausamiento de la misma, el Tribunal Constitucional puede disponer la re conversión de un proceso constitucional en otro si es que concurren las siguientes circunstancias: (i) Que los jueces de ambos procesos tengan las mismas competencias funcionales; (ii) Que se mantenga la pretensión originaria de la parte demandante; (iii) Que existan elementos suficientes para determinar la legitimidad para obrar activa y para poder resolverse sobre el fondo del asunto; (iv) Que se estén cumpliendo los fines del proceso constitucional; (v) Que no exista necesidad de pronunciarse; y, (vi) Que exista predictibilidad en el fallo a pronunciarse. (STC 3674-2007-PA/TC, Fundamentos 6-10).

3. ¿En qué casos procede la declaración de invalidez de todo lo actuado?

La declaración de invalidez de todo lo actuado en los procesos constitucionales sólo es procedente en aquellos casos en los que el vicio procesal pudiera afectar derechos constitucionales de alguno de los sujetos que participan en el proceso. En particular, del impugnado con la demanda, cuya intervención y defensa pueden haber quedado frustrada como consecuencia precisamente del rechazo liminar. Tal construcción jurisprudencial se sustenta en diferentes principios propios a la naturaleza y fines de los procesos constitucionales y, particularmente, en los de: a) economía, b) informalidad y c) la naturaleza objetiva de los procesos de tutela de derechos fundamentales. (STC 4587-2004-PA/TC, Fundamentos 14-19).

4. ¿Qué significa que en los procesos constitucionales no existe etapa probatoria?

El Código Procesal Constitucional (artículo 9) señala que en los procesos constitucionales no existe etapa probatoria. Sin embargo, ello no significa, que las partes en los procesos constitucionales también estén exentas de la carga de adjuntar las pruebas documentales que sustenten sus afirmaciones. La actuación de los medios probatorios no se realiza en los procesos constitucionales como en los procesos judiciales ordinarios, lo que no quiere decir que en los primeros dicha actuación sea inexistente. No obstante, los procesos constitucionales sí tienen también los presupuestos que acuden a la vía constitucional adjuntar los medios probatorios idóneos que sean suficientes para crear en el juzgador un criterio respecto de la veracidad del derecho que se alega. (STC 9878-2005-PHC/TC, Fundamentos 1 y 2).

En los procesos constitucionales no existe etapa probatoria porque en ellos no se declara ni se constituye a favor de ninguna de las partes derechos constitucionales, lo que sí puede suceder en los procesos ordinarios, en cuyo caso se ha previsto la estación probatoria. (STC 1902-2005-PA/TC, Fundamento 4).

5. ¿El Tribunal Constitucional puede aclarar sus sentencias?

El Tribunal sólo puede aclarar sus sentencias cuando advertiera que de su contenido se desprende dudas o confusiones (objetivas y razonables) que impiden sobre su ejecución o cumplimiento cabal, en ningún caso es admisible su utilización con el objeto de modificar o cambiar el sentido de la decisión emitida, pues ello contravendría tanto el primer párrafo del artículo 121 del Código Procesal Constitucional, como el inciso 2) del artículo 139 de la Constitución, que reconoce el principio y el derecho constitucional a la cosa juzgada. (STC 3259-2006-PA/TC, Fundamento 2).

6. ¿Cuál es la finalidad de los procesos constitucionales?

La protección de los derechos fundamentales y garantizar la efectividad del principio de supremacía constitucional son la finalidad de los procesos constitucionales, como lo señala el artículo 11 del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. (STC 0266-2002-PA/TC, Fundamento 2).

Tus derechos
Sábados
11:00 am
TV Perú



En el mes de setiembre el TC realizó en Lima audiencias públicas de Pleno y Salas dejando al voto 426 procesos



El Tribunal Constitucional realizó seis audiencias públicas de Pleno y Salas, en su local de Lima, dejando al voto 426 causas entre procesos de amparo, cumplimiento, habeas corpus y habeas data.

El Pleno del TC presidido por el magistrado Carlos Mesa e integrado por los magistrados Ernesto Álvarez (vicepresidente), Juan Vergara, Ricardo Benamont, Fernando Calle, Gerardo Eto y Oscar Urvilla, celebró dos audiencias

públicas, los días 7 y 21 de setiembre dejando al voto 49 procesos de garantías.

Mientras que la Primera Sala presidida por el magistrado Ernesto Álvarez e integrada por los magistrados Ricardo Benamont y Fernando Calle, realizó dos audiencias públicas dejando al voto 140 procesos de garantías. Estos actos procesales se realizaron los días 5 y 19 de setiembre. Finalmente, la Segunda Sala presidida por

el magistrado Gerardo Eto e integrada por los magistrados Juan Vergara y Oscar Urvilla realizó dos audiencias públicas los días 16 y 30 de setiembre dejando al voto 237 procesos de garantías. Estos actos procesales se realizaron en la Sala de Audiencia del TC, ubicada en Jr. Amash N° 390, Lima.

Las audiencias públicas son transmitidas en vivo y pueden verse a través de la siguiente dirección: www.tc.gob.pe

ACTIVIDADES



El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Carlos Mesa participó en un nuevo taller de inducción parlamentaria en temas relacionados a la jurisdicción del TC con los congresistas de la bancada de Solidaridad Nacional el 12 de setiembre. Asistieron al taller los legisladores Heriberto Benítez, Martín delgado, José Luna, Fabian Capatay, Gustavo Rondón, Vagelio Acuña y Vicente Zeballos.



El magistrado Oscar Urvilla II participó el 9 de setiembre en las actividades por el 40 aniversario del Tribunal Constitucional de Chile. Se desarrolló un coloquio de los presidentes de los magistrados participantes, cuyos temas se denominan: "Desafíos actuales de la Justicia Constitucional: experiencia y logros". El Doctor Urvilla se reunió con el presidente del Tribunal Constitucional de Chile, doctor Raúl Henríquez Repetto.

Pleno del TC recibe la visita de congresistas representantes de la región Arequipa y Cusco

El Pleno del Tribunal Constitucional recibió a congresistas representantes de las regiones de Arequipa y Cusco, quienes dieron algunos alcances sobre el proyecto de irrigación Majes Siguan II.

La primera reunión se produjo el 20 de setiembre y llegaron hasta la sede del TC los parlamentarios Marco Falconi Picardo de la bancada Alianza Parlamentaria, Justino Apaza Ordóñez de Gana Perú y Gustavo Rondón Fudinaga de la Alianza Solidaridad Nacional, quienes explicaron a los magistrados las razones de la importancia de hacer realidad el proyecto de irrigación Majes Siguan II al mismo que según dijeron podrá expandir la frontera agrícola y beneficiar de modo directo a los productores de Arequipa, Cusco, Azuay, Puno, Moquegua y Tacna.

La otra reunión se realizó el 22 de setiembre y en esa oportunidad el Pleno del Tribunal Constitucional recibió



a los legisladores Victoria Mendoza Frías, Julia Irujo Quispe, Roberto Coa Aguilar, Agustina Molina Martínez y Hernán La Torre Durán, todos ellos pertenecientes a la bancada Gana Perú.

Durante el diálogo los congresistas cuestionaron expresaron su preocupación por el proyecto Majes Siguan II, porque según dijeron tal como está diseñado causará un grave impacto ambiental. Asimismo, coincidieron en que la provincia de Tarma tiene un gran potencial agrícola y ganadero, por lo que su desarrollo es importante.

Los parlamentarios electos por la región Arequipa y Cusco fueron recibidos por el presidente del Colegiado, Carlos Mesa y los magistrados Ernesto Álvarez (vicepresidente), Juan Vergara, Ricardo Benamont, Fernando Calle, Gerardo Eto y Oscar Urvilla.



El Director General del CEC, magistrado Gerardo Eto Cruz clausuró el taller desarrollando en la ciudad de Cusco el 22 de setiembre con la exposición "Amparo contra resoluciones judiciales". El evento académico tuvo entre sede el auditorio de la Corte Superior de Justicia del Cusco y estuvo dirigido a jueces y fiscales del marco de sus actividades académicas.



El presidente del TC, Carlos Mesa participó como expositor en el Seminario Internacional: "Neonacionalismo: Derechos Humanos y Pluralismo Jurídico", celebrado del 15 al 17 de setiembre en la ciudad de Sucre en Bolivia. El foro fue organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Bolivia y Chiquinua y participaron destacados juristas internacionales.

